



Consejo de Seguridad

Distr. general
15 de febrero de 2002
Español
Original: inglés

Carta de fecha 14 de febrero de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo

El Comité contra el Terrorismo ha recibido el informe que se adjunta, presentado por Samoa en aplicación del párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo).

Le agradecería que hiciese distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Jeremy **Greenstock**
Presidente del Comité contra el Terrorismo



Anexo

**Carta de fecha 13 de febrero de 2002 dirigida al Presidente del
Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la
resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo por
el Representante Permanente de Samoa ante las Naciones Unidas**

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de remitirle el informe de Samoa presentado al Comité de Lucha contra el Terrorismo en aplicación del párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad (véase el documento adjunto).

El Gobierno de Samoa está dispuesto a proporcionar al Comité cualquier información adicional que considere necesaria.

(Firmado) Tuiloma Neroni **Slade**
Embajador
Representante Permanente

Documento adjunto

Informe de Samoa sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para aplicar la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad

Introducción

Como parte de su contribución a los esfuerzos internacionales para erradicar el terrorismo en todas sus formas, incluidas las actividades de apoyo a los actos terroristas, Samoa ha firmado o se ha adherido a determinados convenios y protocolos internacionales sobre terrorismo.

Samoa es parte del Convenio relativo a las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves de 1963 (Convenio de Tokio); el Protocolo complementario de Montreal para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional de 1970; el Convenio de La Haya para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves de 1970; el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil de 1971 (Convenio de Montreal); y el Convenio de Montreal sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección de 1991.

A raíz de los infames ataques terroristas perpetrados en los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 y respondiendo a lo solicitado en la resolución 1373 del Consejo de Seguridad, el Gobierno ha sometido al Parlamento un proyecto de ley para la prevención y supresión del terrorismo. En la actualidad, dicho proyecto se encuentra en fase de tramitación ante el Comité legislativo correspondiente. En noviembre, durante su visita a Nueva York para intervenir en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Primer Ministro de Samoa, el honorable Tuila'epa Sailele Malielegaoi, firmó el Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 1999.

Medidas legislativas

Como ya se ha señalado, antes del 11 de septiembre de 2001 se aprobaron varias medidas relativas a la actividad terrorista y al crimen organizado. La principal medida legislativa es el nuevo Proyecto de Ley de Prevención y Supresión del Terrorismo, que en la actualidad se encuentra en trámite parlamentario y que se espera sea aprobado antes de junio de 2002.

El **Proyecto de Ley de Prevención y Supresión del Terrorismo de 2001** tipifica y sanciona con una pena de prisión de 5 a 15 años la financiación o la ayuda a la financiación de actos terroristas.

El artículo 21 del Proyecto de Ley faculta al Tribunal Supremo para ordenar el bloqueo de fondos cuando se determine que tales fondos fueron recaudados con objeto de cometer o financiar un acto terrorista. El Fiscal General también puede solicitar al Tribunal Supremo que bloquee fondos que se sospeche hayan sido recaudados con el propósito de cometer actos terroristas. Con arreglo a la **Ley de Procedimiento Penal de 1972**, cualquier persona puede solicitar a los tribunales una orden de embargo de bienes que se consideren prueba de la comisión de un delito.

En cuanto al blanqueo de capitales, Samoa dispone de un marco jurídico y operativo para detectar, denunciar y perseguir los delitos de blanqueo de capitales con arreglo a la **Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2000**. La Ley

contempla las actividades terroristas, incluidos los recursos procedentes directa o indirectamente de actividades terroristas. A tenor de dicha norma, las entidades financieras están obligadas a informar de cualquier transacción sospechosa.

La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales se basa en un modelo de ley del Commonwealth que incorpora cuarenta recomendaciones del Grupo Especial de Expertos Financieros sobre blanqueo de capitales en relación con esta materia. Esta ley es muy completa en comparación con las de otras jurisdicciones de la región del Pacífico y permite cumplir debidamente con las disposiciones de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad en materia de blanqueo de capitales y otras actividades terroristas conexas. La Ley regula, entre otras cuestiones, la revelación, denuncia, sanciones, bloqueo y confiscación de propiedades, la asistencia mutua a Estados extranjeros y la extradición y entrega de delincuentes fugitivos. También permite al Tribunal Supremo de Samoa bloquear los activos presuntamente procedentes de actos delictivos.

Las entidades financieras afectadas por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales han adoptado directrices para la comunicación al Banco Central de las transacciones financieras que consideren sospechosas. El Banco Central puede solicitar una orden judicial para bloquear los fondos de cualquier cuenta cuando se demuestre que se ha utilizado para realizar transacciones sospechosas.

La **Ley sobre Delincuencia de 1961** se ocupa de numerosos delitos que pueden entrar dentro de la definición de terrorismo y establece penas que van desde multas dinerarias a prisión a perpetuidad o la pena capital.

La **Ley de Armas de 1960** prohíbe el comercio de armas y munición, incluida su importación, salvo que se cuente con una licencia. La Policía puede confiscar armas de fuego o munición en poder de comerciantes autorizados e incautarse de ellas. La Ley prohíbe la posesión de armas de fuego o munición sin una licencia o permiso. Se prohíbe poseer o llevar armas, munición o explosivos excepto para usos apropiados y legales, y la policía dispone de las facultades necesarias de registro y confiscación. Según una medida conexas, la **Ley de delitos policiales de 1961**, se considera delito portar un arma peligrosa sin un objetivo lícito, lo que puede acarrear una pena máxima de un año de prisión.

Se han tomado medidas para reforzar el intercambio de información entre la policía de Samoa y otras fuerzas de policía y seguridad del Pacífico y de otros países, incluidas la Interpol y la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos.

También se han celebrado acuerdos preliminares para el establecimiento de una unidad de inteligencia financiera que sirva de enlace con los servicios de inteligencia financieros extranjeros en la lucha contra la delincuencia financiera transnacional.

Con arreglo a la **Ley de Inmigración de 1966**, el Ministro de Inmigración puede denegar refugio a individuos indeseables, en particular, aquellos que puedan representar un peligro para la paz, el orden o la seguridad del país. El Proyecto de Ley de Prevención y Supresión del Terrorismo actualmente en trámite parlamentario permitirá a la policía arrestar inmigrantes y extranjeros sobre los que pese la sospecha de haber cometido un acto terrorista. Asimismo, atribuirá al Tribunal Supremo jurisdicción territorial extraordinaria para oír y pronunciarse sobre cualquier cuestión relativa a la Ley de Inmigración con independencia de que tenga lugar dentro o fuera de Samoa.

Según la **Ley de Aviación Civil de 1998** se considera delito cualquier acto terrorista que pueda poner en peligro una aeronave. Esta Ley también prohíbe introducir armas de fuego, explosivos y otras armas en una aeronave.

En cuanto a la prestación de asistencia en investigaciones criminales o procedimientos sobre financiación o apoyo a actos terroristas, la **Ley de Extradición de 1974** establece la detención y entrega al país solicitante de cualquier persona que se encuentre en Samoa y que haya sido acusada de un delito susceptible de extradición o de cualquier persona que se encuentre en libertad de modo presuntamente irregular después de haber sido condenada por un delito por el que deba concederse la extradición. Si el acto de terrorismo es un “delito susceptible de extradición” según el Estado solicitante, las autoridades de Samoa podrán arrestar y entregar al delincuente.

Otra medida legislativa relevante es la **Ley de Permisos y Pasaportes de 1978**, que prohíbe la entrada en Samoa a cualquier persona que no presente a su llegada un pasaporte válido y en vigor que acredite, en modo que las autoridades de inmigración consideren satisfactorio, la nacionalidad e identidad de dicha persona.

Puntos de contacto

El Gobierno de Samoa ha designado el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Misión Permanente en Nueva York como puntos principales de información o asistencia para las cuestiones relativas a la resolución 1373 y ha informado de ello al Comité de Lucha contra el Terrorismo.

13 de febrero de 2002
